

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

**SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA)**

Septiembre 8 de 2022: Al despacho el proceso contra **DANILO HERNANDEZ SALAMANCA** identificado con C.C. No. 17.415.574, informando que este Juzgado concedió la libertad condicional al interno, mediante auto interlocutorio No. 0416 del 10 de agosto de 2022, previo pago de la caución equivalente a UN (1) SMLMV y suscripción de la diligencia de compromiso, auto que fue notificado al condenado el día 16 de agosto de 2022 a las 11:40 horas, a través del correo electrónico abog_danimarias@hotmail.com

Verificado el correo institucional, consta que a la fecha el condenado NO ha efectuado los trámites ordenados en la mencionada providencia, por lo que no se ha materializado la libertad condicional concedida.

Por lo anterior, este Juzgado emitirá pronunciamiento sobre la posible libertad por pena cumplida del infractor. Sírvasse proveer.

BLANCA CECILIA GUTIERREZ
SECRETARIA

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA**

Septiembre ocho (08) de dos mil veintidós (2022)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0478

Número Proceso:	110016000000201602181
Sentenciado:	DANILO HERNANDEZ SALAMANCA
Identificación:	C.C. No. 17.415.574
Sitio de Reclusión:	PRISIÓN DOMICILIARIA - PRISIÓN DOMICILIARIA – COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA D.C. – LA PICOTA
Decisión:	CONCEDE LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA A PARTIR DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DECRETA REHABILITACION PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS

1.- OBJETO A DECIDIR

Procede el despacho a pronunciarse sobre el cumplimiento de la pena impuesta a **DANILO HERNANDEZ SALAMANCA** identificado con C.C. No. 17.415.574 quien se encuentra purgando pena en prisión domiciliaria en la Calle 11 C No. 7-20, sector “Yerbabuena”, Vereda La Tribuna en Facatativá Cundinamarca, vigilado por el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá D.C. – La Picota -.

2.- CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley -1709 de 2014- concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

3.- RESEÑA PROCESAL

Por hechos ocurridos desde el año 2011, el Juzgado 44 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá D.C., mediante sentencia proferida el 1 de noviembre de 2016, condenó a **DANILO HERNANDEZ SALAMANCA** (y otros¹) a la pena principal de **SESENTA (60) MESES DE PRISIÓN** y a la multa de 60 SMLMV, como coautor responsable del delito de **ESTAFA en la modalidad de masa**. ABSOLVIO al condenado por el delito de uso de documento falso en aplicación del principio *in dubio pro reo.*, y le impuso la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un término igual al de la pena principal de prisión impuesta. **NO CONCEDIÓ** la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni la prisión domiciliaria y dispuso librar orden de captura No. 2016-3454² en contra del infractor.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, mediante decisión del 13 de febrero de 2017, confirmo el fallo condenatorio el cual cobró ejecutoria el 31 de marzo de 2017.

El homólogo 19 de Bogotá D.C., avocó conocimiento del asunto el 20 de abril de 2017 y solicitó ante el Centro de Servicios Judiciales – Sistema Penal Acusatorio Bogotá, información si se adelantó incidente de reparación y de ser así remitieran copias de las decisiones adoptadas, quienes por oficio RU – O – 7070 del 5 de junio de 2017 les informó: *“que revisado el sistema de información virtual Siglo XXI del nuevo sistema penal acusatorio, a la fecha no se observa audiencia programada de inicio de incidente de reparación integral dentro del proceso de la referencia”*.

Por auto emitido el 22 de junio de 2017, negó al infractor la prisión domiciliaria prevista en el artículo 38B del C.P., y como quiera que el condenado interpuso recurso de apelación en contra de la providencia que negó el sustituto penal, el homólogo 19 de Bogotá D.C., concedió el recurso de apelación en el efecto devolutivo ante el Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá D.C.

El Juzgado 44 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá D.C. mediante proveído del 29 de septiembre de 2017, REVOCÓ la decisión proferida por el homólogo 19 de Bogotá D.C., y en su lugar dispuso CONCEDER al sentenciado **DANILO HERNANDEZ SALAMANCA** la prisión domiciliaria.

El homólogo 19 de Bogotá D.C., mediante auto del 4 de octubre de 2017, requirió al condenado para el cumplimiento de las obligaciones impuesta y para el respectivo trámite ante las autoridades competentes y adelantar el trámite administrativo para su encarcelación y reseña ante el Complejo Carcelario Metropolitano de Bogotá – La Picota -.

El condenado allegó ante el homólogo 19 de Bogotá D.C., el pago de la caución efectuado mediante póliza No. NB-100316037 el 17 de octubre de 2017 y suscribió diligencia de compromiso el 18 de octubre de 2017.

¹ William Andrés Agredo Angarita (54 meses de prisión – multa 45 smlmv), Oscar Alfredo Romero Pérez (79 meses y 28 días de prisión – multa 150 smlmv)

² Folio 13 – archivo 008 – expediente digitalizado



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

En vista que el condenado **DANILO HERNANDEZ SALAMANCA** fue capturado el día **18 de octubre de 2017**³ y puesto a disposición para el cumplimiento de la pena, el homologo 19 de Bogotá, dispuso por auto del 18 de octubre de 2017, librar la boleta de encarcelación No. 51⁴ con destino al Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá La Picota, para la reseña del infractor, por lo que el condenado fue trasladado al domicilio ubicado en la Calle 11 C No. 7-20 sector Yerbabuena, Vereda La Tribuna en Facatativá Cundinamarca y por auto del 15 de junio de 2018 dispuso remitir el expediente por competencia a este Juzgado.

Este Juzgado avocó el conocimiento de las diligencias el mediante auto de sustanciación No. 0884 del 30 de julio de 2018.

A través de auto de sustanciación No. 0676 del 8 de julio de 2022, solicitó ante las directivas del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá D.C., La Picota, los documentos previstos en el artículo 471 del C.P.P., para el estudio de la libertad condicional.

Es de anotar, que el condenado interpuso acción de tutela en contra de este despacho, ante el Juzgado 4º Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá, y mediante fallo emitido el 19 de julio de 2022, concedió el amparo reclamado por el condenado y ordenó a la dirección del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá “La Picota”, Oficina Jurídica – COMEB Bogotá, que dentro del término de 48 horas remitiera a este Juzgado las cartillas biográficas y certificación de conducta del infractor, para el estudio de la libertad condicional. Ordenó desvincular al INPEC y al USPEC y al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Facatativá Cundinamarca.

Esta agencia judicial, mediante auto interlocutorio No. 0416 del 10 de agosto de 2022, previo pago de la caución equivalente a UN (1) SMLMV y suscripción de la diligencia de compromiso, auto que fue notificado a **DANILO HERNANDEZ SALAMANCA** condenado el día 16 de agosto de 2022 a las 11:40 horas, a través del correo electrónico abog_danimarias@hotmail.com

Verificado el correo institucional, consta que a la fecha el condenado NO ha efectuado los trámites ordenados en la mencionada providencia, por lo que no se ha materializado la libertad condicional concedida.

En la presente oportunidad procede el juzgado a pronunciarse sobre la posible libertad por pena cumplida del infractor.

3.1. SOBRE EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020⁵ del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

³ Acta de derechos del capturado – folio 17 archivo 008 – expediente digitalizado

⁴ Folio 24 – archivo 008 – expediente digitalizado

⁵ ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: "[...] *De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios*".

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*⁶.

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que

⁶ CSJ RAD 794 (01-07-20)



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

4.- CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Competencia

Este juzgado es competente para decidir sobre la posible libertad por pena cumplida a favor del condenado, conforme lo señalan los numerales 1º, 3º y 4º, del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, así como de la vigilancia del proceso al estar privada de la libertad en prisión domiciliaria en la Calle 11 C No. 7-20, sector “Yerbabuena”, Vereda La Tribuna en Facatativá Cundinamarca y vigilado por el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá D.C. – La Picota -, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007⁷.

Según los hechos ocurridos desde el año 2011, **DANILO HERNANDEZ SALAMANCA**, fue investigado y condenado bajo el imperio de la Ley 599 de 2000 (reformada por la Ley 1142 de 2007, 1453, 1474 de 2011) y 906 de 2004, con las modificaciones de la Ley 1709 de 2014.

4.2. Sobre la Prisión Domiciliaria

A partir del día en que al condenado **DANILO HERNANDEZ SALAMANCA**, el homólogo 19 de Bogotá D.C., por auto del 18 de octubre de 2017, materializó la prisión domiciliaria concedida por el Juzgado 44 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá D.C., no se han recibido reportes o novedades de informes de visitas realizadas al interno por parte del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá D.C. – La Picota.

Sin embargo, se observa en la cartilla biográfica del interno y en los documentos expedidos por las directivas del COMEB La Picota -, allegados para el estudio de la Libertad Condicional, NO figuran anotaciones de fugas, ni transgresiones cometidas por el sentenciado durante el tiempo de reclusión domiciliaria.

Este Juzgado nota con preocupación la situación que se está presentando con los domiciliarios, no solo en los municipios a los que se les vigila la pena (Circuito de Funza, Villeta y Facatativá) sino a nivel nacional, en la que no existe un control de vigilancia de parte de los funcionarios del INPEC, debido a diferentes situaciones, como el personal, la ubicación, la congestión vehicular, el presupuesto, ahora el COVID 19 etc., que han generado una vigilancia deficiente. A pesar del escaso personal con que contamos (asistente social, asistente administrativo, secretaria y sustanciador) no se pudo ordenar la visita debido a las normas de salubridad impuestas por la OMS, el Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura. Complementa lo anterior que de parte del INPEC están cerrando las cárceles a nivel departamental creando una congestión sobre la vigilancia de los implicados que se encuentren con este mecanismo sustitutivo como se presentó recientemente con la Cárcel de Zipaquirá y Funza cuya responsabilidad recae en las de Bogotá, o actualmente en la de Villeta ya que son un volumen alto de personas que se encuentran con este mecanismo sustitutivo.

⁷ 12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y Guaduas (a este último municipio le crearon circuito penitenciario)⁷.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

Al respecto se trae a colación reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, que señaló:

“...2.4. Las premisas normativas antes mencionadas, así como los antecedentes particulares del caso sometido a consideración de la Corte, permiten deducir las siguientes reglas:

i) El estatus jurídico de detenido lo adquiere el procesado en virtud de la respectiva orden judicial, una vez la misma se materialice, lo que se aviene a lo dispuesto en el art. 15 de la Constitución Política sobre la reserva judicial para la afectación de la libertad. Esa condición no varía por el hecho de que la privación de la libertad se materialice en su domicilio o en un centro carcelario. La condición de detenido o privado de la libertad se mantiene hasta que la autoridad competente disponga lo contrario, a través de una decisión que reúna los requisitos previstos en la ley.

ii) Por tanto, si a una persona privada de la libertad en su domicilio se le atribuye el incumplimiento de las obligaciones que debe cumplir para mantener ese beneficio, se abre la posibilidad del cambio de sitio de reclusión, sin que ello implique que su situación jurídica – de detenido – varíe automáticamente, pues ello solo puede ocurrir por dos razones: (a) que un juez disponga su libertad, a través de una decisión que reúna los requisitos previstos en la ley; o (b) que se demuestre que el detenido domiciliariamente se sustrajo al régimen de privación de la libertad.

iii) Además, la condición de detenido y la privación de la libertad bajo la modalidad de prisión domiciliaria no están supeditadas a la realización de las correspondientes visitas de control a cargo del INPEC, porque aquellas son labores de «apoyo» encaminadas a garantizar el cumplimiento de la condena en el domicilio⁸. (...)

Más adelante complemento:

“...Además, como se dijo en páginas precedentes, las trasgresiones al régimen de la prisión domiciliaria imponen la inminente privación de la libertad en centro carcelario, pero de no disponerse ésta, habrá de entenderse que el condenado continúa purgando la condena en el domicilio fijado, siempre que no se acredite su evasión del mismo...”⁹

Como se anotó no se tiene certeza de que las directivas del COMEB – La Picota –, se haya pronunciado al respecto sobre si hubo o no evasión del infractor de su domicilio o que hayan colocado la correspondiente denuncia por el incumplimiento de permanecer ejecutando la pena en la prisión domiciliaria concedida.

4.3. Sobre la Libertad por pena cumplida

El condenado **DANILO HERNANDEZ SALAMANCA** ha estado privado de la libertad **desde el día 18 de octubre de 2017¹⁰** hasta la presente fecha, por lo que ha cumplido físicamente **1787 días** que equivalen a **59 meses y 17 días de la pena impuesta**

El sentenciado NO cuenta con redenciones de pena reconocidas.

Así las cosas, encuentra este Despacho que el interno hasta la fecha acumula un total de **59 meses y 17 días**, lo que significa que cumple la pena impuesta de **60 MESES DE PRISIÓN** el próximo **21 DE SEPTIEMBRE DE 2022**.

⁸ CÓDIGO PENAL. ARTÍCULO 38C. CONTROL DE LA MEDIDA DE PRISIÓN DOMICILIARIA. El control sobre esta medida sustitutiva será ejercido por el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad **con apoyo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario** (Inpec).

El Inpec deberá realizar visitas periódicas a la residencia del condenado y le **informará al Despacho Judicial respectivo sobre el cumplimiento de la pena**.

⁹ CSJ T Radicación N° 106432 (03-09-19) M.P. Dra Patricia Salazar Cuellar

¹⁰ Acta de derechos del capturado – folio 17 archivo 008 – expediente digitalizado



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

Sobre el tiempo en que ha cumplido pena el condenado traemos a colación un pronunciamiento del H. Tribunal Superior de Bogotá:

“...Por tanto, sería paradójico y francamente extraño que la privación de la libertad de un investigado tuviera una forma de calcularse, mientras que para un condenado fuese de otra. Además, el juez impuso una pena pensando que cada mes tendría 30 días. Ni uno más. Cada día en que una persona está detenida es importante y no debería ser invisibilizado.(...)”

*En **tercer** lugar, conectado con la premisa inicial, las leyes que afectan derechos fundamentales deben ser leídas de la forma más restrictiva posible. Dos criterios fundamentan esta idea: el principio **por homine** (que favorece a la persona) 14 y el principio **favor libertatis** (que beneficia la libertad) 15*

Por lo tanto, existen dos posibilidades. Una, calcular el tiempo definido por el juez como un mes estándar de 30 días y, por tanto, cada día de privación de la libertad descontaría una a una esas jornadas. Otra, la asumida por el juez de instancia, orientada a pensar que cada mes debe ser descontado en su integridad, independiente de si él tiene, por ejemplo, 31 días.

Como se demostró en el ejemplo que aparece en el numeral 2 de las consideraciones de esta decisión, la fórmula que permite la menor restricción del derecho a la libertad es – y debe ser – la primera. De esta manera, el juez de ejecución de penas podría convertir la pena de prisión en días y, a partir de allí, evaluar si el procesado ha cumplido con los requisitos que permitirían restablecer su libertad.

Esta solución se ofrece más justa, pues los meses pueden ser irregulares, pero los días o, mejor, las noches en que una persona está lejos de su familia son, al menos en esta parte del planeta, inmodificables. Además, no hay que olvidar que el tiempo pasa más despacio para quien está privado de la libertad.

4. Según lo expuesto, se observa que la apreciación del juzgado de ejecución no puede ser compartida, toda vez que ella implica una lectura que restringe de mayor forma y en contra del principio pro persona, el derecho a la libertad.”¹¹

En efecto, se tiene que, del cumplimiento físico de la pena principal de **60 meses de prisión**, impuesta por el Juzgado 44 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá D.C., en sentencia del 1 de noviembre de 2016, confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala Penal, el día 13 de febrero de 2017, **DANILO HERNANDEZ SALAMANCA** cumple la pena de prisión impuesta a partir del día **21 DE SEPTIEMBRE DE 2022**, fecha desde la cual se concederá la libertad inmediata e incondicional por pena cumplida.

Acorde con lo anterior y de conformidad con lo normado en el artículo 476 del Código de Procedimiento Penal, (Ley 906 de 2004) la Secretaría del Despacho oficiará a las entidades a las que se les comunicó la sentencia y se cancelarán las órdenes de captura que en su contra pudiesen existir por cuenta del presente asunto, rindiendo los informes de ley.

En consecuencia y de acuerdo a lo expuesto de manera precedente puede concluirse que es pertinente declarar extinguida la pena privativa de la libertad impuesta a **DANILO HERNANDEZ SALAMANCA** por lo que se decretará la extinción de la pena y su libertad inmediata, incondicional y definitiva **pero sólo a partir del 21 de septiembre de 2022**.

¹¹ T.S. Bogotá Rad 11001-60-OO-O13-2010-13961-02 (7046)(23-08-22) M-P. Dr Carlos Andrés Guzmán Díaz



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

4.4 Sobre la Rehabilitación de las Penas Accesorias.

Este juzgado es competente para decidir de oficio sobre la rehabilitación de las penas accesorias conforme lo señalan los numerales de los artículos 92 (Ley 599 de 2000) 38-8 y 480 de la Ley 906 de 2004, así como de la vigilancia del proceso al corresponder los juzgados de los Circuitos penitenciarios de Facatativá Cundinamarca conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007¹².

Atendiendo los criterios de la Política Criminal el legislador estableció las consecuencias que se derivan de las conductas punibles como lo son las sanciones que acompañan a las penas principales, sustitutivas y accesorias privativas de otros derechos. En efecto se clasifican como penas principales la privativa de libertad de prisión, la pecuniaria de multa y las demás privativas de otros derechos. Conforme lo señala el artículo 36 del C.P., son penas sustitutivas la prisión domiciliaria como sustitutiva de la intramural y el arresto de fin de semana como sustitutivo de la multa. Por último, dentro de las penas privativas de otros derechos se encuentra la de *“la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas”*.

Efectivamente en el artículo 44 del C.P., la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas priva al penado de la facultad de elegir y ser elegido, del ejercicio de cualquier otro derecho político, función pública, dignidades y honores que confieren las autoridades oficiales.

En este sentido la Sentencia C-581 de 2001 señala que son derechos políticos *“el del sufragio, el de ser elegido, el de desempeñar cargos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción, el de participar en referendos y plebiscitos, el de ejercer acciones públicas, todos los cuales están en cabeza de los nacionales, quienes los pueden ejercer únicamente a partir de la adquisición de la ciudadanía”*.

Agrega que *“Ninguno de estos derechos es de carácter absoluto, como se expresó anteriormente, y para ejercerlos se requiere haber adquirido la calidad de ciudadano, la cual solamente se obtiene cuando se han cumplido los requisitos de nacionalidad y edad establecida por el legislador (18 años). Además, se requiere que aquella no haya sido suspendida.”*.

En el presente asunto se tiene que se tramitó y falló bajo la vigencia del artículo 92 del C.P., que establece:

“ARTICULO 92. LA REHABILITACION. La rehabilitación de derechos afectados por una pena privativa de los mismos, cuando se imponga como accesoria, operará conforme a las siguientes reglas:

1. Una vez transcurrido el término impuesto en la sentencia, la rehabilitación operará de derecho. Para ello bastará que el interesado formule la solicitud pertinente, acompañada de los respectivos documentos ante la autoridad correspondiente.

2. Antes del vencimiento del término previsto en la sentencia podrá solicitarse la rehabilitación cuando la persona haya observado intachable conducta personal, familiar, social y no haya evadido la ejecución de la pena; allegando copia de la cartilla biográfica, dos declaraciones, por lo menos, de personas de reconocida honorabilidad que den cuenta de la conducta observada después de la condena, certificado de la

¹² 12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y **Guaduas** (a este último municipio le crearon circuito penitenciario)¹².

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

entidad bajo cuya vigilancia hubiere estado el peticionario en el período de prueba de la libertad condicional o vigilada y comprobación del pago de los perjuicios civiles.

En este evento, si la pena privativa de derechos no concurriere con una privativa de la libertad, la rehabilitación podrá pedirse dos (2) años después de la ejecutoria de la sentencia que la impuso, si hubiere transcurrido la mitad del término impuesto.

Si la pena privativa de derechos concurriere con una privativa de la libertad, solo podrá pedirse la rehabilitación después de dos (2) años contados a partir del día en que el condenado haya cumplido la pena privativa de la libertad, si hubiere transcurrido la mitad del término impuesto.

3. Cuando en la sentencia se otorgue la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad, y no se exceptúa de ella la pena accesoria, ésta se extinguirá con el cumplimiento del período de prueba fijado en el respectivo fallo.

Cuando, por el contrario, concedido el beneficio en mención, se exceptúa de éste la pena accesoria, su rehabilitación sólo podrá solicitarse dos (2) años después de ejecutoriada la sentencia en que fue impuesta, si hubiere transcurrido la mitad del término impuesto.

No procede la rehabilitación en el evento contemplado en el inciso 5 del artículo 122 de la Constitución Política.” (Resalta fuera de texto)

Aterrizando al caso objeto de estudio, como se dijo en líneas anteriores el Despacho debe pronunciarse sobre la rehabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de la pena privativa de la libertad, que se le impuso a **DANILO HERNANDEZ SALAMANCA** en el fallo reseñado, encontramos que desde el **31 de marzo de 2017**, fecha en la que quedó debidamente ejecutoriada la decisión condenatoria, comenzó a correr el término fijado, respecto a la inhabilitación de las penas accesorias, dicho término continuó durante el lapso impuesto (**60 meses de prisión**) hasta el pasado **31 DE MARZO DE 2022** fecha en la cual transcurrió el término previsto en la sentencia y en aplicación del numeral 1º de la norma en cita, la recuperación de estos derechos, tendrán que ser restablecidos.

Por lo tanto, éste funcionario desde ahora **RESTABLECERÁ** de inmediato todos los derechos jurídicos que en su momento fueron inhibidos por ello, conforme lo expresado en aplicación de los artículos 43 y 92 de la Ley 599 de 2000 y el artículo 480 de la Ley 906 de 2004.

La libertad se hará efectiva para ante las directivas del COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTÁ D.C. - LA PICOTA -, **pero sólo a partir del 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SIEMPRE Y CUANDO NO SEA REQUERIDO POR OTRA AUTORIDAD JUDICIAL, CASO EN EL CUAL DEBERA SER DEJADO INMEDIATAMENTE A SU DISPOSICIÓN.**

En firme la presente decisión, se ordena por la Secretaría del Juzgado **REMITIR** las presentes diligencias al Centro de Servicios Judiciales del SPA de Bogotá D.C. -, para su archivo definitivo.

4.4. Sobre la comisión y notificación al condenado.

Teniendo en cuenta, que **DANILO HERNANDEZ SALAMANCA**, se encuentra purgando pena en prisión domiciliaria (Calle 11 C No. 7-20, sector “Yerbabuena”, Vereda La Tribuna en Facatativá Cundinamarca), se ordena por secretaría **NOTIFICAR** al condenado la presente decisión a través del correo electrónico abog_danimarias@hotmail.com

Por la Secretaría del Juzgado, PROCÉDASE a librar la **BOLETA DE LIBERTAD** a favor de **DANILO HERNANDEZ SALAMANCA** identificado con C.C. No. 17.415.574, **pero solo a partir del 21 de septiembre de 2022** y ante las directivas del **COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTÁ D.C. – LA PICOTA, SIEMPRE Y**

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

CUANDO NO SEA REQUERIDO POR OTRA AUTORIDAD JUDICIAL, CASO EN EL CUAL SER DEJADO INMEDIATAMENTE A SU DISPOSICIÓN.

5. OTRAS CONSIDERACIONES

5.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

“ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social...”

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.460 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejército EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una Secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la libertad condicional.

Por último se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

“... los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»¹³, a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

... las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley... (CSJ AP 2 Jul. 2014,

¹³ Ibídem.



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

“...6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad...”¹⁴

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en el artículo 64 de la Ley 599 de 2000, motivo que lo lleva a acceder la petición invocada.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *“desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional”*.¹⁵

5.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 el mismo Consejo aclaró el Acuerdo CSJCUC21-126 del 2 de mayo de 2021 autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso *“suspensión de términos de los juzgados que se encuentran ubicados en la sede judicial de Facatativá a partir del 3 de mayo y hasta el 7 de mayo de 2021, inclusive*, debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y de allí en adelante hemos tenido que ingresar custodiados por la Policía o el Ejército Nacional para poder ubicar y verificar materialmente los procesos para el respectivo pronunciamiento.

Sumado a ello en el Acuerdo CSJCUA21-32 del 7 de mayo de 2021 autorizó a los jueces y empleados adelantar sus funciones de Administración de justicia, mediante la utilización de herramientas tecnológicas y en condiciones de trabajo desde casa. Y se agrega la situación de orden público que se presentó en el municipio de Facatativá que ha sido golpeado de forma indiscriminada por algunos ciudadanos que el viernes 28 de mayo y sábado 29 de mayo de 2021, se presentó en horas de la noche el ingreso violento de personas no autorizadas a la Sede Judicial, que ocasionaron, por segunda vez, daños, hurtos, destrozos y situaciones de vandalismo en general en dicha sede, afectando los despachos judiciales y el centro de servicios judiciales, viéndose afectada la prestación del servicio de Administrar Justicia en la Sede Judicial de Facatativá.

¹⁴ CSJ T 102248

¹⁵ C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

Como consecuencia atendiendo las directrices trazadas por el Consejo Seccional de la judicatura de Cundinamarca y la Dirección Ejecutiva Seccional de Cundinamarca, Bogotá y Amazonas por razones de orden público presentadas en este municipio se ordenó el cierre extraordinario de la Sede Judicial y suspensión de términos hasta el 18 de junio de 2021 y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

Nuevamente se presentaron nuevos actos de vandalismo y en Acuerdo No CSJCUC21-47 del 24 de junio de 2021 el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca autorizó la prórroga del cierre extraordinario y la suspensión de términos de los juzgados de la jurisdicción penal ubicados en la sede judicial de Facatativá (Juzgado 1o y 2o Penal del Circuito de Facatativá-Juzgado 1o y 2o Penal Municipal de Facatativá y Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Facatativá), a partir del 26 de junio y hasta el 29 de junio de 2021. Además, en horas de la noche del 29 de junio se presentaron nuevos actos de vandalismo e incineración en la sede judicial lo que originó una nueva prórroga hasta el 21 de julio de 2021. En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año anterior nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

Del mismo modo con el personal que contamos (juez, secretaria, asistente social, asistente administrativo y oficial mayor (a partir de noviembre de 2020) para la carga laboral el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la situación jurídica del sentenciado.

6.- DECISIÓN

En mérito de lo expuesto y sin necesidad de ahondar en el asunto, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Facatativá, Cundinamarca,

RESUELVE

PRIMERO. - RECONOCER que el sentenciado **DANILO HERNANDEZ SALAMANCA** identificado con C.C. No. 17.415.574, cumple a partir del **21 DE SEPTIEMBRE DE 2022** con el total de la pena de prisión de **60 meses de prisión** impuesta por el Juzgado 44 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá D.C., en sentencia del 1 de noviembre de 2016, confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala Penal, el día 13 de febrero de 2017.

SEGUNDO. - CONCEDER a DANILO HERNANDEZ SALAMANCA, LA LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA, pero solo a partir del 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022, conforme a lo consignado en la parte motiva del presente proveído.

TERCERO. - En consecuencia y de acuerdo a lo expuesto de manera precedente puede concluirse que es pertinente declarar extinguida la pena privativa de la libertad impuesta a **DANILO HERNANDEZ SALAMANCA**, por lo que se decretará la extinción de la pena y su libertad inmediata, incondicional y definitiva.

CUARTO. - DECRETAR la REHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS impuesta en el fallo reseñado a partir del día **21 DE SEPTIEMBRE DE 2022**, a favor del sentenciado **DANILO HERNANDEZ SALAMANCA** identificado con C.C. No. 17.415.574, en aplicación de los artículos 43 y 92 de la Ley 599 de 2000 y el artículo 480 de la Ley 906 de 2004.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

QUINTO.- Teniendo en cuenta, que **DANILO HERNANDEZ SALAMANCA**, se encuentra purgando pena en prisión domiciliaria (Calle 11 C No. 7-20, sector “Yerbabuena”, Vereda La Tribuna en Facatativá Cundinamarca), se ordena por secretaría **NOTIFICAR** al condenado la presente decisión a través del correo electrónico abog_danimarias@hotmail.com

SEXTO. - ORDENAR que ejecutoriada esta decisión se comunique de ella a las autoridades que conocieron del fallo tal como lo dispone el artículo 476 del Código de Procedimiento Penal, (Ley 906 de 2004) para la actualización de los registros y antecedentes que por esta causa se originaron contra el referido sentenciado, y que se cancelen las órdenes de captura impartidas contra **DANILO HERNANDEZ SALAMANCA**, en razón de este proceso.

SEPTIMO. - En firme la presente decisión, se ordena por la Secretaría del Juzgado **REMITIR** las presentes diligencias al Centro de Servicios Judiciales del SPA de Bogotá D.C. -, para su archivo definitivo.

Contra la presente decisión proceden los recursos de Reposición y de Apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON MOGUERA PINILLOS
JUEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA



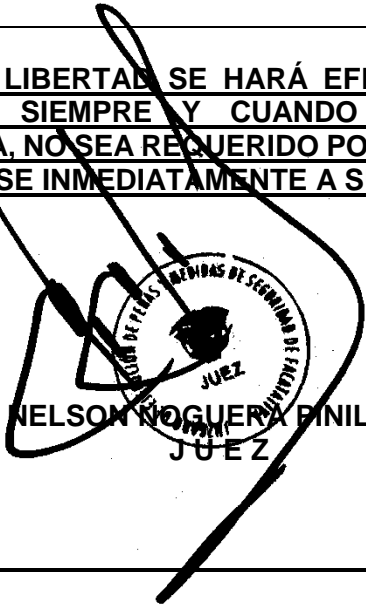
JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ - CUNDINAMARCA
jepmsfac@cendoj.ramajudicial.gov.co

BOLETA DE LIBERTAD No. 0129

FECHA	OCHO (08) DE SEPTIEMBRE DE 2022
Señor Director: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA – LA PICOTA -.	
Sírvasse poner en libertad a: DANILO HERNANDEZ SALAMANCA.-	
Cédula de Ciudadanía No. 17.415.574 EXPEDIDA EN ACACIAS META.-	
Lugar de nacimiento: VERGARA CUNDINAMARCA. -	
Fecha de Nacimiento: 28 DE AGOSTO DE 1970. -	
Delitos: ESTAFA en la modalidad de masa.-	
Estado Civil: UNIÓN MARITAL DE HECHO. -	
Profesión u oficio: LIDER SOCIAL VINCULADO AL SECTOR CAMPESINO. -	
Nombres de los padres: OLIVO HERNANDEZ y MARIA DOLORES SALAMANCA. -	
Nombre del conyugue: MARIA ALCIRA SALAMANCA.-	
Motivo de libertad: LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA A PARTIR DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022.-	
CUI: 110016000000201602181 -.	
Número Interno: 2018-0225.-	
Autoridades que conocieron: CUI 110016000000201602181: FISCALIA 1ª SECCIONAL CUNDINAMARCA, JUZGADO 47 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS, JUZGADO 44 PENAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO, TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C., SALA PENAL, JUZGADO 19 EPMS BOGOTA D.C., Y ESTE ESTRADO JUDICIAL 2018-0225.-	
<u>OBSERVACIONES: ESTA LIBERTAD SE HARÁ EFECTIVA A PARTIR DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SIEMPRE Y CUANDO EL SENTENCIADO DANILO HERNANDEZ SALAMANCA, NO SEA REQUERIDO POR OTRA AUTORIDAD, CASO EN EL CUAL DEBERÁ DEJARSE INMEDIATAMENTE A SU DISPOSICIÓN. -</u>	
<div> NELSON NOGUERA PINILLOS JUEZ</div>	